



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE QUIBDÓ (CHOCO)

Quibdó, veintitrés (23) de enero de dos mil veinticuatro (2.024)

PROCESO: ACCIÓN DE TUTELA
RADICACIÓN: 27001310300120240000700
DEMANDANTE: JOSÉ MARÍN LLOREDA MOSQUERA
DEMANDADO: JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE QUIBDÓ

SENTENCIA TUTELA PRIMERA INSTANCIA No. 7

ASUNTO

Procede el Juzgado a decidir la **ACCIÓN DE TUTELA** promovida por el señor **JOSÉ MARÍN LLOREDA MOSQUERA**, identificado con la C.C. 4.861.419, actuando a nombre propio, contra el **JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE QUIBDÓ**, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales y constitucionales al **DEBIDO PROCESO** en conexidad con el acceso a la justicia y **PETICIÓN**.

HECHOS

Se indica en los hechos de la presente acción de tutela, que el señor **JOSÉ MARÍN LLOREDA MOSQUERA** el día 11 de julio de 2023, presentó solicitud ante el juzgado accionado requiriendo copia integral de todos los folios del expediente en el proceso en su contra y que es tramitado por el despacho accionado.

Finalmente, asevera que, a la fecha no le han dado respuesta a su solicitud, pese a que desde el día 12 de julio de 2023, fue cargada su solicitud a la plataforma TYBA.

PRETENSIONES

En el presente escrito tutelar, se presentaron las siguientes pretensiones:

1. Que se declare que el **JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE QUIBDÓ** ha violentado los derechos de petición y debido proceso en armonía con el acceso a la administración de justicia del señor **JOSÉ MARIN LLOREDA**



JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE QUIBDÓ (CHOCO)

MOSQUERA.

2. Se ordene al **JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE QUIBDÓ**, responder la solicitud instaurada por el accionante el día 11 de julio de 2023 y remita el expediente o brinde acceso al mismo.

TRÁMITE PROCESAL

Revisado el trámite procesal encuentra el despacho que esta acción de tutela fue admitida el 16 de enero de 2024.

RESPUESTA DEL ACCIONADO

Juzgado Primero Civil Municipal De Quibdó

El despacho accionado, dentro del término oportuno dio contestación a la presente acción constitucional, indicando que son ciertos los hechos de la demanda y que el proceso ejecutivo radicado 27001400300120100097300 se encuentra terminado por pago total de la obligación desde el 25 de septiembre de 2023.

Afirma que, en relación a la solicitud de expedición de copias del proceso aludido, se tiene que el memorial fue repartido para su trámite, pero este fue obviado. Sin embargo, mediante auto de sustanciación del 18 de enero del año avante, se dejó el proceso a disposición del solicitante en la secretaría del despacho, para que éste se acerque, previa cancelación del valor del arancel judicial y así poder entregar las copias requeridas, pues, al ser un proceso antiguo, el expediente se encuentra físico y pendiente de turno para ser digitalizado.

Finalmente, adjuntó los valores actualizados del arancel judicial y solicitó declarar hecho superado, toda vez, que ya depende del actor acceder a las copias solicitadas.

PRUEBAS

Parte Demandante



JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE QUIBDÓ (CHOCO)

- Copia de solicitud enviada el 11 de julio de 2023.
- Copia constancia de envío.
- Copia captura de plataforma TYBA.
- Copia cédula de ciudadanía de José Marín Lloreda Mosquera.

Parte Demandada

Juzgado Primero Civil Municipal De Quibdó

- Captura Acuerdo PCSJA23-12106 – Actualización Valores del Arancel Judicial.
- Auto N° 0055 del 19 de enero de 2024, autorizando la entrega de copias.
- Expediente 27001400300120100097300 con 172 folios.
- Estado Número 7 del 22 de enero de 2024.
- Títulos Retenidos.
- Comprobante de envío.

CONSIDERACIONES

Competencia:

Con fundamento en el Decreto 2591 de 1991 y el Artículo 1 Numeral 5 del Decreto 333 del 6 de abril del 2021 según el cual “Las acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada”, este despacho Judicial es competente para conocer y fallar la presente demanda de acción de tutela en primera instancia.

Procedibilidad:

La acción de tutela se halla consagrada en el Artículo 86 de la Constitución Política, así mismo fue desarrollada por medio del Decreto Ley 2591 de 1991 y su Decreto reglamentario 306 de 1992 y Decreto 1382 de 2000. Por tanto, la acción de tutela es el mecanismo creado para proteger los Derechos Fundamentales de todas las personas, proveyendo una protección inmediata a dichos derechos, cuando quiera que consideren que estos sean violados o amenazados por la acción u omisión de



JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE QUIBDÓ (CHOCO)

cualquier autoridad pública o particular en los casos expresamente establecidos en la Ley. Esta acción, ha sido dispuesta como un medio preferente y sumario, sólo procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Problema Jurídico

Procede el despacho a determinar si el accionado **JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE QUIBDÓ**, vulneró los derechos de petición y debido proceso en conexidad con el acceso a la administración de justicia del señor **JOSÉ MARÍN LLOREDA MOSQUERA**, o si con las pruebas allegadas actualmente existe carencia de objeto por hecho superado.

MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL

Examen De Procedencia

De conformidad a lo prohiado por el Artículo 86 de la Constitución Nacional, la acción de tutela es un mecanismo de protección de los derechos de carácter Constitucional Fundamental, la cual se hace procedente cuando quiera que éstos resulten violados o amenazados por la acción o la omisión de las autoridades públicas o de los particulares en aquellos casos previstos en la Ley, siempre y cuando el afectado no cuente con otro medio de defensa judicial para la protección del derecho violado o amenazado, salvo que la tutela se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Así entonces debemos precisar que la tutela además de ser un procedimiento breve y sumario tiene como esencia la emisión de una decisión con medidas específicas que permitan la cesación o se evite la violación de un derecho fundamental, orden que el Estado representado en el Juez de Tutela se obliga a hacer cumplir; su alcance ha sido precisado por la jurisprudencia de la Honorable Corte Constitucional, en la **sentencia T-001 de 2012**, así:

“ (...) Se trata entonces, de un instrumento jurídico confiado por la Constitución a los jueces, cuya justificación y propósito consiste en brindar a la persona la posibilidad de requerir sin mayores requerimientos de índole



JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE QUIBDO (CHOCO)

formal y en la certeza que obtendrá oportuna resolución, a la protección directa e inmediata del Estado, a objeto de que, en su caso, consideradas sus circunstancias específicas y a falta de otros medios, se haga justicia frente a situaciones de hecho que representen quebranto o amenaza de sus derechos fundamentales, logrando así que se cumpla uno de los fines esenciales del Estado, consistente en garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución (...).

Acorde a la norma superior enunciada, la tutela es un mecanismo subsidiario de defensa, que sólo procede *“cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.”*

En el caso que nos ocupa, tenemos que el actor ha elevado derecho de petición al Juzgado accionado con la finalidad de tener una copia de todos los folios del expediente para conocer todas las piezas procesales y la relación de los títulos pagados, sin que a la fecha de instaurar la presente acción de tutela hubiere tenido respuesta de fondo a dicho requerimiento, para ello el despacho debe referirse al derecho de petición elevado por los usuarios ante autoridades judiciales, en la que será necesaria referencia a la reiteración jurisprudencial, donde la Honorable Corte Constitucional se ha pronunciado de la siguiente manera:

“A partir de la jurisprudencia constitucional que ha desarrollado el núcleo y alcance del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, se ha establecido que este tiene dos dimensiones fundamentales: la primera implica la facultad de presentar solicitudes respetuosas a las entidades públicas y privadas, y la segunda comprende el derecho a tener respuesta oportuna, clara, completa y de fondo a las peticiones presentadas.

De esta forma, dicha garantía fundamental refiere a la posibilidad de las personas de elevar peticiones respetuosas ante las autoridades, las cuales deben ser resueltas de manera pronta y oportuna. Este deber se extiende a las autoridades judiciales, quienes se encuentran obligadas a resolver las solicitudes de los peticionarios en los términos prescritos por la Ley y la Constitución para tal efecto.

Ahora bien, en lo que respecta al derecho de petición ante autoridades judiciales,



JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE QUIBDÓ (CHOCO)

esta Corporación ha precisado sus alcances al manifestar que si bien es cierto que el derecho de petición puede ejercerse ante los jueces y en consecuencia estos se encuentran en la obligación de tramitar y responder las solicitudes que se les presenten, también lo es que *[el juez o magistrado que conduce un proceso judicial está sometido -como también las partes y los intervinientes- a las reglas del mismo, fijadas por la ley, lo que significa que las disposiciones legales contempladas para las actuaciones administrativas no son necesariamente las mismas que debe observar el juez cuando le son presentadas peticiones relativas a puntos que habrán de ser resueltos en su oportunidad procesal y con arreglo a las normas propias de cada juicio]*¹.

En este sentido, la Corte ha sostenido que el alcance del derecho de petición encuentra limitaciones respecto de las peticiones presentadas frente a autoridades judiciales, toda vez que han de diferenciarse los tipos de solicitudes, las cuales pueden ser de dos clases: (i) las referidas a actuaciones estrictamente judiciales, que se encuentran reguladas en el procedimiento respectivo de cada juicio, debiéndose sujetar entonces la decisión a los términos y etapas procesales previstos para tal efecto; y (ii) aquellas peticiones que por ser ajenas al contenido mismo de la Litis e impulsos procesales, deben ser atendidas por la autoridad judicial bajo las normas generales del derecho de petición que rigen la administración y, en especial, de la Ley 1755 de 2015.

En este orden de ideas, la omisión del funcionario judicial en resolver las peticiones relacionadas a su actividad jurisdiccional según las formas propias del proceso respectivo configura una violación del debido proceso y del derecho al acceso a la administración de justicia. Por otro lado, la omisión de la autoridad jurisdiccional en resolver las peticiones formuladas en relación con los asuntos administrativos constituye una vulneración al derecho de petición, sin perder el rango de carácter constitucional y por ende fundamental, gozando de una especial protección del estado.

Con lo anterior, concluye esta juez constitucional que efectivamente el usuario de la administración de justicia, hoy accionante **JOSÉ MARÍN LLOREDA MOSQUERA**, ejerció su derecho de petición sin obtener dentro del término de ley respuesta de fondo a la misma, razón por la cual acudió a este mecanismo constitucional que a

¹ Sentencia T-394 del 24 de septiembre de 2018, M.P. Diana Fajardo Rivera.



JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE QUIBDÓ (CHOCO)

todas luces resulta procedente para incoar el amparo de dicho derecho, ahora bien, es de advertir, que dadas las circunstancias que rodean el caso que nos ocupa, la agencia judicial accionada manifestó en el término concedido por el despacho para ejercer su derecho de defensa, que si bien es cierto incurrió en una omisión este fue enmendado con el auto interlocutorio No. 055 del 19 de enero de 2024, por ello, considera esta juez constitucional que debemos referirnos a lo que se ha planteado por la Jurisprudencia, donde se ha reiterado que la carencia actual de objeto se configura cuando la situación fáctica que motivó la tutela desaparece o se modifica en el sentido que cesa la presunta acción u omisión que sustentaba la tutela de los derechos fundamentales supuestamente conculcados; en esos eventos la petición de amparo carece de eficacia ya que desaparece el objeto jurídico sobre el cual recaería la decisión de tutela.

La figura de la carencia actual de objeto se puede presentar a través de tres formas:

i) Daño consumado, que se presenta cuando se ejecuta el daño o la afectación que se pretendía evitar con la acción de tutela, de tal manera que, el juez no puede dar una orden al respecto con el fin de hacer que cese la vulneración o impedir que se materialice el peligro. Así, al existir la imposibilidad de evitar la vulneración o peligro, lo único procedente es el resarcimiento del daño causado por la violación de derecho. No obstante, la Corte ha indicado que, por regla general, la acción constitucional es improcedente cuando se ha consumado la vulneración pues, esta acción fue concebida como preventiva mas no indemnizatoria. (SU 225 de 2013) ii) **Hecho superado.** se presenta cuando entre el momento de interposición de la acción de tutela y el fallo, se evidencia que, como consecuencia del obrar de la accionada, se superó o cesó la vulneración de derechos fundamentales alegada por el accionante. Dicha superación se configura cuando se realizó la conducta pedida (acción u abstención) y, por tanto, terminó la afectación, resultando inútil cualquier intervención del juez constitucional en aras de proteger derecho fundamental alguno, pues ya la accionada los ha garantizado. (T-382 de 2018) iii) Acaecimiento de una situación sobreviniente. se presenta en aquellos casos en que tiene lugar una situación sobreviviente, que, a diferencia del escenario anterior, no debe tener origen en una actuación de la accionada, y que hace que ya la protección solicitada no sea necesaria, ya sea porque el accionante asumió la carga que no le correspondía, o porque la nueva situación hizo innecesario conceder el derecho.²

² T-481 de 2016



JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE QUIBDÓ (CHOCO)

Sobre este tema también se ha señalado que:

“...La carencia actual de objeto por hecho superado se configura cuando, entre la interposición de la acción y el fallo, se satisface por completo la pretensión objeto de amparo. Es decir que “por razones ajenas a la intervención del juez constitucional, desaparece la causa que originó la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales del peticionario...”³”

CASO CONCRETO

Descendiendo al caso de examen, se evidencia que efectivamente el accionante radicó petición ante el correo electrónico del juzgado accionado para la calenda del 11 de julio de 2023, en el que solicitaba copia integral de todos los folios del expediente del proceso bajo radicado 27001400300120100097300. Sin embargo, la autoridad accionada al contestar la presente acción constitucional acredita haber solucionado el requerimiento del peticionario, de acuerdo a la solicitud por él impetrada, lo que permite concluir sin mayores elucubraciones, que la eventual transgresión al derecho fundamental de petición, se vio superada en el trámite de la presente acción constitucional, pues se profirió el auto 055 del 19 de enero, notificado por estado el 22 de enero y enviado al correo electrónico del accionante como obra en el expediente.

Bajo este norte, es menester precisar que la Corte Constitucional en sentencia SU-522 de 2019 sistematizó la jurisprudencia respecto de los deberes que se desprenden para el juez de tutela cuando se presenta un hecho superado, indicando que “no es perentorio que el juez de tutela haga un pronunciamiento de fondo”. Sin embargo, agregó que el juez puede pronunciarse sobre el caso para realizar observaciones sobre los hechos que dieron origen a la interposición de la tutela, si así lo considera, entre otros, pero en todo caso la sentencia que declare el hecho superado debe acreditar su configuración.

Nótese que, de los elementos de persuasión obrantes al diligenciamiento, se logró verificar que la autoridad judicial querellada procedió a emitir solución de fondo a la petición elevada por el promotor, se le comunicó el contenido de la misma y se dio

³ Corte Constitucional, sentencia T 058 de 2021. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.



JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE QUIBDÓ (CHOCO)

cumplimiento por la secretaría del despacho a lo ordenado en la providencia ya referida, demostrando con ello que, en el curso del trámite constitucional, se superó la transgresión de los eventuales derechos fundamentales afectados, y deprecados con este mecanismo.

Por lo expuesto, resulta probada la existencia de un hecho superado, ya que el extremo accionado durante el curso de esta acción cumplió con las obligaciones legales a su cargo, circunstancia que torna inane cualquier orden, pues, por simple sustracción de materia, al desaparecer la circunstancia atentatoria de derechos fundamentales, la misma caería en el vacío; máxime si no se demostró la afectación de otras garantías superlativas del señor **JOSÉ MARIN LLOREDA MOSQUERA**.

En mérito de lo expuesto el **JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE QUIBDÓ CHOCÓ**, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO: **NEGAR** la presente acción constitucional por carencia actual del objeto por hecho superado, promovida por el señor **JOSÉ MARIN LLOREDA MOSQUERA**, contra el **JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE QUIBDÓ**, conforme a las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: **COMUNICAR** esta decisión a las partes e intervinientes por el medio más rápido y eficaz, haciéndoles entrega de copia completa de la providencia.

TERCERO: **REMITIR** la sentencia a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión, de no llevarse a cabo la impugnación de este fallo. Efectúense las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

MARIA ALEJADRA MUÑOZ PARRA



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE QUIBDÓ (CHOCO)

Juez